

**NOMENCLATURA** □ □ : 1. [40] **Sentencia** □ □  
**JUZGADO** □ □ □ : 5° **Juzgado Civil de Santiago**  
**CAUSA ROL** □ □ □ : C-6438-2023  
**CARATULADO** □ □ : **CHAVOL/FISCO DE CHILE**

**Santiago, tres de febrero de dos mil veinticinco.**

**VISTOS:**

Con fecha 18 de abril de 2023, a folio 1, comparece don Nelson Guillermo Caucoto Pereira, y Francisco Félix Bustos Bustos, abogados, domiciliados en Dr. Sótero del Río N°326, oficina 1104, comuna de Santiago, en representación de don Lorenzo Alejandro Chavol Purrán; quien interpone demanda de indemnización de daños y perjuicios, en juicio ordinario, en contra del Fisco de Chile, representado por el Presidente del Consejo de Defensa del Estado, don Raúl Sergio Letelier, abogado, ambos domiciliados en calle Agustinas N°1225, piso 4, comuna de Santiago, por los siguientes fundamentos.

Inserta a su líbelo el testimonio del demandante, en los siguientes términos: “Yo, Lorenzo Alejandro Chavol Purrán, nacido el 10 de Agosto de 1950, en la ciudad de Victoria, IX Región de la Araucanía, declaro que fui víctima de violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos de parte del Estado de Chile como consecuencia del Golpe de Estado de 1973. Mi familia la conformaba mi hermano Eduardo Chavol Purrán, quien ya no vivía en el mismo lugar con los demás hermanos. Arturo Chavol Purrán fallecido a los 18 de Bronconeumonía y mi hermana menor Carmen Chavol Purrán, quien quedó a mi cuidado tras el fallecimiento de nuestros padres.

Cuando ocurrió el evento represivo, mi familia estaba conformada por mi hermana, mi conviviente María Hueiquillan Rucal, y mis hijos gemelos Florencia y Felicindo Chavol Hueiquillan, quienes tenían 2 años de edad.

Yo no pude casarme con María debido a que en el momento en que nos presentamos en el Registro Civil para realizar la ceremonia, la madre de María no presentó los papeles solicitados debido a que era menor de edad, por eso tenemos una relación de convivencia desde ya 50 años.

El 29 de noviembre de 1973 fui detenido por Carabineros, por ser simpatizante del Partido Comunista. Fui detenido desde mi propio hogar, en la



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: RQKCXSXTLX

comunidad Manuel Chavol. Allí me detuvo el sargento Aguilera, quien pertenecía al retén de Carabineros de Quino.

Ese día las personas de la comunidad estaban trabajando en labores agrícolas y ganaderas usuales. Yo me encontraba cuidando animales cuando noté que a unos 100 metros se venían acercando carabineros y militares. Me gritaron de forma agresiva “ven pa’ acá.” Me acerqué para no tener problemas y fui golpeado en la espalda violentamente con la parte posterior de un fusil mientras me gritaban “y vo’ indio de mierda,”

Todo fue realizado a partir de las órdenes del único juez de Quino, German Weber. Él hizo desalojar a toda la comunidad Chavol de manera violenta. Los terrenos de la comunidad eran de 120 hectáreas, las que fueron entregadas por el CORA a nuestra comunidad, la cual se desarrolló tranquilamente hasta el desalojo.

Este juez nos arrebató de forma cruel, violenta e injustificada aquello que nos pertenecía.

Luego de la golpiza que me propinaron los uniformados, fui trasladado hasta el retén de Quino en donde estuve detenido por 5 días. Luego fui trasladado a la cárcel de Victoria, en donde fui violentado físicamente de parte de Carabineros y militares. Las golpizas y maltrato físico constante eran acompañados de insultos y amenazas. Recuerdo que me decían que era un indio exterminador sin derechos y que me iban a matar. Se me interrogó de forma igual de violenta y fui imputado por la condición de “comunista” y tener conocimiento sobre ubicación de armas lo cual era por completo falso.

Estuve cerca de dos meses y medio en reclusión, periodo durante el cual fui torturado violenta y denigrantemente, sufriendo vulneraciones físicas y psicológicas.

Recuerdo entre mis compañeros de reclusión al Sr. Antonio Inostroza, Vicente Nahuel y Juan Colihuinca, entre otros. De acuerdo con mi testimonio, los informes psicológicos concluyeron lo siguiente:

A modo de síntesis desde el ámbito psicológico, don Lorenzo Alejandro Chavol Purrán presenta un relato que resulta suficientemente concordante con la observación clínica del presente evaluador, considerando que existen signos



y síntomas típicos y esperables como consecuencia de una situación de vulneración como la que relata.

Desde la esfera psicológica la sintomatología presentada en las etapas posteriores al hecho represivo y en los plazos en que son reconocibles, es en general concordantes con la siguiente categoría clínica que se pasa a describir.

Se aprecia la presencia de un Trastorno de estrés Postraumático presentando la siguiente sintomatología: exposición a amenazas de lesiones, síntomas de instrucción, evitación de estímulos asociados al suceso traumático, alteraciones cognitivas y del estado de ánimo (creencias negativas persistentes sobre los demás, estado emocional negativo persistente, disminución de la participación en actividades significativas e incapacidad para experimentar emociones positivas) y alteración de la alerta y la reactividad (hipervigilancia, respuesta de sobresalto exagerada y alteraciones del sueño) durando estos síntomas más de un mes y causando un malestar significativo en las distintas áreas de vida”.

En cuanto al derecho, señala que los hechos relatados constituyen crímenes de lesa humanidad en cuanto los antecedentes consignados forman parte del catálogo de crímenes reconocidos como de lesa humanidad según lo establecido en el Estatuto del Tribunal Militar de Nüremberg de 1945.

Menciona que crímenes intolerables para la humanidad han hecho surgir un complejo normativo especial en el ámbito del Derecho Internacional, cuestión que resulta fundamental a la hora de resolver qué clase de responsabilidad le cabe al Estado de Chile. Refiere jurisprudencia.

Respecto de la responsabilidad del Estado analizada desde la Constitución Política de la República, hace presente el artículo 38 inciso 2º de la Constitución, mencionando que este precepto consagra una acción constitucional para hacer efectiva la responsabilidad de los organismos del Estado, cuando estos por su actividad provoquen un daño a una persona. Refiere jurisprudencia. Indica que la norma constitucional citada se complementa con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 18.575, y el artículo 4 de la misma ley.

Agrega que el fundamento básico de esta responsabilidad legal o extracontractual del Estado está contenido en diversas disposiciones de rango



constitucional, supraconstitucional y también legal, todas las cuales son normas propias del ámbito del derecho público.

Refiere jurisprudencia de la Corte Suprema que abrió camino en la adopción por los tribunales chilenos de criterios establecidos por el derecho internacional en las causas de esta naturaleza: casos como “Caro con Fisco”, “Bustos con Fisco” y “Albornoz con Ortiz y Fisco.”

Asegura que para una adecuada comprensión y delimitación de la responsabilidad del Estado por los hechos que sustentan su demanda, resulta necesario remitirse al Capítulo I de la Constitución, sobre las Bases de la Institucionalidad, donde se desarrollan los principios basales desde donde se estructura todo el sistema institucional. Cita el artículo 1 inciso 4º, y el artículo 5 inciso 2º. La conjunción de ambos preceptos resume la doctrina completa del constitucionalismo, o sea, del poder limitado por el Derecho, para servir a la persona sobre la base de los principios que caracterizan a la civilización centrado en los valores de la dignidad y los derechos inalienables del ser humano. (Cea, José Luis. Derecho Constitucional Chileno. Tomo I. Pág. 210).

Sostiene que las disposiciones reseñadas en conjunto con los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, que a su vez establecen los principios de la primacía constitucional y de juridicidad, conforman el denominado estatuto de la responsabilidad extracontractual del Estado. Responsabilidad que emana de la naturaleza misma del ente estatal como persona jurídica compleja creada para la realización del bien común.

Sobre la responsabilidad del Estado a la luz del Derecho Internacional, advierte que este conjunto de normas y principios no han hecho sino reconocer aquello que a nivel internacional se ha venido desarrollando por más de un siglo. En efecto, concepciones tales como bien común, la superioridad ontológica de la persona frente al Estado o la dignidad humana como límite a la soberanía estatal, formaban ya parte integrante del corpus iuris internacional conformado por el derecho internacional humanitario, así como del Derecho Internacional de los Derechos Humanos del cual el Estado de Chile forma parte.

Afirma que el Estado de Chile mediante la suscripción de declaraciones y convenciones a nivel internacional, así como concurriendo con su voto en la



aprobación de múltiples resoluciones por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estado Americanos, o bien mediante la vigencia de la costumbre internacional y los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas, de acuerdo con el artículo 38 Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, ha ido adquiriendo de forma progresiva una serie de obligaciones que responden a la obligación general de “respeto de los derecho esenciales del hombre” por parte de los Estados. Tal obligación se desprende del preámbulo y artículos de la Carta de la Organización de los Estado Americanos, en concordancia con los preceptos de la Carta de las Naciones Unidas, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Manifiesta que todo lo anterior, esto es, el desarrollo de este complejo normativo conocido como Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ha importado un cambio significativo en la configuración de la responsabilidad estatal. En concreto, en materia de derechos humanos los Estados tienen una obligación de resultado, cual es, la efectiva vigencia de los derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales.

De allí, la responsabilidad del Estado por violación a los derechos humanos es una cuestión objetiva, toda vez que el ilícito por violaciones a los derechos fundamentales se produce en el momento en que el Estado actúa en violación de una norma obligatoria, sin necesidad de que exista falta o culpa por parte del agente. (Cfr. Aguiar, Asdrúbal. La responsabilidad internacional del Estado por violación de derechos humanos. 1993. Pág. 25). Aduce que se trata, en consecuencia, de una responsabilidad objetiva en donde no interesa la presencia de dolo o culpa en el accionar dañoso del Estado. La responsabilidad internacional del Estado nace al momento en que con su actuar se infringe los límites que le señalan los derechos humanos como atributos inherentes a la dignidad de las personas, sin necesidad de que exista falta o culpa por parte del autor material del acto.

Indica que confirma normativamente esta interpretación el encabezado del artículo 19 de la Constitución.



Relata que la Constitución reconoce y asegura la vigencia de los derechos humanos, obligándose ante la comunidad internacional a su efectiva vigencia a través de su artículo 5 inciso 2º, que sanciona e incorpora toda la normativa internacional aplicable en la especie. Cita el artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y refiere al artículo 19 N°20 de la Constitución Política de la República.

Sobre la improcedencia de aplicar las normas y principios del derecho privado a los casos de responsabilidad del Estado por delitos de lesa humanidad, expresa que la correcta resolución del caso sub lite requiere la aplicación armónica de la Constitución Política, de los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos y de la Ley de Bases de la Administración del Estado. A contrario sensu, en este conflicto son improcedentes las reglas propias del derecho de daños contenidas en el Código Civil, toda vez que dicho estatuto se construye sobre premisas y principios diferentes a los del derecho público y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, constituyendo un error de lógica y sistemática jurídica la aplicación de normas de derecho privado a las situaciones en que se persigue la responsabilidad del Estado por actos dañosos, ya que ambos difieren en su naturaleza y fines, destinado a otras conductas e intereses. Señala que al respecto cobran relevancia los artículos 26 y 27, ambos de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

Refiere que la diferencia entre uno y otro sistema de responsabilidad es evidente. Por el momento basta con recordar que: “es claro que el perjuicio causado a un particular por otro o por el Estado en cuanto sujeto de relaciones privadas, es diverso al perjuicio que se le puede causar a un particular por una actuación ilícita y dañosa de un Estado con relación a los derechos y libertades fundamentales de la persona humana.” (Cfr. Nash, Claudio. Las reparaciones ante la Corte Interamericana de Derecho Humanos. Santiago de Chile, Pág. 23).

Hace presente el razonamiento de dos jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos quienes se han pronunciado de forma directa sobre lo inadecuado que resulta extender por la vía de la analogía ciertos conceptos propios del Derecho Civil para resolver conflictos que versen sobre



violaciones a los derechos fundamentales del ser humano. Refiere jurisprudencia.

Enumera un conjunto de razones de texto que llevan a sostener por qué el derecho de daños del Código Civil chileno es insuficiente para resolver conflictos que versan sobre violaciones a los derechos fundamentales de la persona humana. Tales razones son las siguientes:

1) Este caso no se trata de la búsqueda de una reparación para un delito común. Así, el Código Civil no es la norma que tiene que juzgar aquellos actos en donde los hechos que se ventilan dicen relación directa con una práctica sistemática y masiva por parte del Estado destinada a exterminar y/o hacer desaparecer a un número importante de la población nacional, sólo en razón de sus creencias e ideologías políticas. Afirma que para no desnaturalizar el tenor literal del artículo 2314 del Código Civil uno tendrá que reconocer que dicha norma fue diseñada para resolver ilícitos comunes y, por lo mismo, ante un caso como éste, el derecho aplicable debe hallarse más bien en el ámbito constitucional, administrativo e internacional; y,

2) Las normas del Título XXXV del Libro IV del Código de Bello fueron dictadas en un contexto en donde los mayores riesgos, peligros y daños parecían venir del comportamiento de personas ebrias (artículo 2318); de adolescentes con mala educación y hábitos viciosos (artículo 2321); edificios en ruinas (artículo 2323); o bien, de animales sueltos, extraviados y fieros (artículos 2326 y 2327). De más está decir que la regla del artículo 2322 es del todo insuficiente a la hora de resolver la dinámica que se produce al interior de las Fuerzas Armadas y de Orden, cuando han cometido crímenes de lesa humanidad, más aún, es contraria al Derecho Internacional pues permite la exculpación estatal ante tan horrendos crímenes.

Sobre la imprescriptibilidad de las acciones judiciales en casos de responsabilidad del Estado por delitos de lesa humanidad, expone que el hecho de que la materia de la que trata la presente causa quede gobernada bajo normas de carácter público e internacional por sobre las meramente privadas, implica reconocer la autonomía y orgánica particularidad del complejo normativo de los derechos humanos, de modo tal que no solo cabe afirmar el carácter objetivo de la responsabilidad del Estado sino además la



imprescriptibilidad de las acciones patrimoniales derivadas de las violaciones a los derechos humanos.

Afirma que, en toda sociedad democrática y respetuosa de las libertades y derechos de cada individuo, los ataques y los daños causados por parte de los agentes del Estado en contra de la vida, integridad física o la libertad ambulatoria de una persona, derechos que, por lo demás, se hallan protegidos por los artículos 4, 5 y 7, todos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y por los N°1 y N°7, ambos del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, constituyen un tipo específico de violación que deja al infractor en el deber de responder ante la comunidad internacional y a la víctima en situación de ser legítimamente reparada.

Menciona que la citada Convención Americana, tratado internacional ratificado por Chile y actualmente vigente en su territorio por la vía del artículo 5° inciso 2° de la Constitución Política, señala la existencia del deber de reparar que se le impone a todo Estado que haya sido responsable de violar alguno de los derechos fundamentales de la persona humana que se encuentren garantizados por dicha Convención.

Si bien, por un lado, es efectivo que en ninguna disposición de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se señala de modo expreso la imprescriptibilidad de las acciones civiles, por otra parte, la ausencia de regulación jurídica expresa le impone al juez la tarea de interpretar, o más bien, integrar la normativa existente con los correspondientes Principios generales del Derecho que, en el caso concreto, orientan al derecho administrativo y en especial al derecho internacional de los derechos humanos. Así, se encuentra establecido en el artículo 38 de la Corte Internacional de Justicia.

Cita jurisprudencia en virtud de la cual resulta imposible abstraerse del hecho de que toda violación a un derecho humano, al interior del sistema interamericano trae aparejada la obligación de reparar el mal o daño que ha causado. En esta materia, la norma rectora es el artículo 63 del Pacto de San José de Costa Rica.

Argumenta que, en Chile, dada su calidad de Estado miembro del sistema interamericano, la lógica que debiera operar en casos de violaciones



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: RQKCXSXTLX



de derechos humanos de alguna persona tendría que ser la misma: reparar íntegramente el mal causado. Obligación ésta del Estado que queda sujeta al constructo normativo de los derechos humanos y a sus principios formativos, a saber: el principio pro homine, entendiendo por tal la interpretación de sus preceptos en el sentido más favorable a la persona; el principio de progresividad de sus normas abiertas a una evolución conceptual; y el principio de la congruencia de aquellas, entre otros. (Cfr. Nikken, P. “El concepto de derechos humanos”, en Estudios Básicos de Derechos Humanos, I.I.D.H., Costa Rica, 1994. pp. 15-17).

Cita lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Masacre plan de Sánchez” sobre el artículo 63 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y menciona como normas aplicables la Convención sobre la imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de lesa humanidad, instrumento no ratificado por Chile, pero cuya obligatoriedad se encuentra reconocida por nuestros tribunales de justicia, como emanación de una norma de ius cogens, y el Estatuto de la Corte Penal Internacional, aprobado por el Decreto Supremo N°144, publicado el 1° de agosto de 2009.

Explica que nuestro país ha concurrido bajo el amparo del tratado marco de la Carta de las Naciones Unidas de 1948, conforme a la información oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores, obligándose por tratados internacionales de ejecución, los cuales ha suscrito en la modalidad de declaraciones y resoluciones por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Concluye que la idea de reparación se trata de una obligación compleja e indisoluble constituida por el deber de a) Adoptar disposiciones legislativas y administrativas y otras medidas apropiadas para impedir las violaciones; b) Investigar las violaciones de forma eficaz, rápida, completa e imparcial y, en su caso, adoptar medidas contra los presuntos responsables de conformidad con el derecho interno e internacional; c) Dar a quienes afirman ser víctimas de una violación de sus derechos humanos o del derecho humanitario un acceso equitativo y efectivo a la justicia, como se describe más adelante, con



independencia de quién resulte ser en definitiva el responsable de la violación; y, d) Proporcionar a las víctimas recursos eficaces, incluso reparación.

Esgrime que a la luz de todo lo dicho, se puede concluir que la idea de reparación se trata de una obligación compleja e indisoluble constituida por el deber de investigar los hechos, la obligación de sancionar a los responsables y la obligación de reparar adecuadamente a las víctimas, y que esta última obligación tiene que ser tratada como un deber imprescriptible en virtud del Principio IV de dicho cuerpo legal.

Puntualiza que el fundamento en virtud del cual un Estado queda obligado a la ejecución de una reparación determinada frente a una persona que haya sido víctima de violaciones a sus derechos fundamentales mediante ilícitos que la conciencia jurídica universal considera intolerables, se rige por normas y principios del derecho público e internacional de los derechos humanos logrando sujetar dentro de sus esferas, por vía de la progresividad normativa, un sistema de responsabilidad autónomo que se conforma transversalmente desde los primeros acuerdos interestatales sobre el jus in bello.

Manifiesta que así lo han entendido los Tribunales Superiores nacionales y es en ese sentido que la más reciente jurisprudencia de la Corte Suprema le ha otorgado el carácter de imprescriptibles a las acciones civiles que derivan de los crímenes de lesa humanidad atentatorios contra los derechos humanos. Indica que se aprecia la concreción de los principios de congruencia y progresividad, así como la interpretación e integración de sus normas según el ya citado principio pro homine.

A modo ilustrativo, menciona algunos de los fallos en que nuestra Corte Suprema ha declarado la imprescriptibilidad de la acción civil cuando éste emana de un crimen de lesa humanidad.

Menciona que, en un caso como el presente, la reparación a la demandante pasaría por el hecho que la judicatura interna acogiese la acción civil incoada con ese propósito. Ésta es la única conclusión a la que se puede arribar si se considera que los hechos que dan vida a su demanda son crímenes cometidos por agentes del Estado de Chile en contra de la parte demandante.



Sobre el daño provocado y el monto de la indemnización, señala que en este caso existe un daño de carácter moral que se expresa en dolor, sufrimiento, angustia, rabia e impotencia ante una situación extremadamente violenta, injusta e ilegítima que vivió en carne propia el demandante. Esto es indudablemente un daño moral, el cual, según la dogmática jurídica y la jurisprudencia nacional e internacional, amerita ser reparado a través de una indemnización.

Explica que se entiende por daño moral aquella específica clase de menoscabo que afecta a los atributos y facultades morales o espirituales de una persona, esto es un dolor, un pesar, una angustia, molestias psíquicas que sufre una persona en sus sentimientos a consecuencia del hecho ilícito y, en general, toda clase de sufrimiento moral o físico. Esta forma de conceptualizar el daño moral es consistente con los sentidos dados por la doctrina chilena y la jurisprudencia (nacional e internacional).

Cita doctrina nacional, y sentencias dictadas por los Tribunales Superiores de Justicia.

Respecto de la prueba del referido daño moral en sede judicial, esgrime que tanto la doctrina como la jurisprudencia mayoritaria coinciden en señalar que el daño moral no requiere ser probado en juicio en tanto se tenga por acreditado el hecho ilícito que lo ha generado. Menciona que desde el momento en que ya se tiene por probado que una persona perdió su vida, fue torturada, o vio lesionada su libertad individual o su seguridad personal por obra de agentes del Estado, entonces carece de sentido preguntarse en sede judicial si acaso habrá resultado ilesa en su fuero interno –sus afectos y emociones-, luego de los delitos cometidos en su perjuicio. Por eso, es que para un sector importante del foro judicial al cual adhiere este libelo pretensor, basta que la víctima acredite la lesión de un bien jurídico personalísimo para que luego, entonces, se infiera como consecuencia necesaria el daño sufrido, con ocasión del hecho ilícito cometido. Cita jurisprudencia.

Hace presente que idéntico criterio al de la dogmática y la práctica judicial chilenas se halla a nivel de la jurisprudencia internacional. En la actualidad ya es jurisprudencia constante y pacífica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la idea de que el daño moral no requiere prueba en sede



jurisdiccional. De hecho, en las sentencias dictadas por esta Corte se constata que una víctima de violaciones graves a sus derechos humanos, tales como, las afectaciones a su derecho a la vida, o a la integridad personal o la libertad ambulatoria, no tiene que asumir como carga procesal la tarea de probar el daño moral que refiere haber sufrido, ya que, como víctima directa y reconocida de tortura mediante un Informe Oficial, debiese presumirse el daño moral.

Asegura que después de todo lo dicho hasta aquí, es comprensible que una demandante experimente cierta dificultad al momento de proponer ante la justicia alguna cifra exacta que haga las veces de reparación integral del mal causado. No obstante, los órganos encargados de la administración de justicia requieren de parte de quienes ejercen acciones legales que estos sean capaces, entre otras cosas, de expresar con claridad sus pretensiones y precisar de forma concreta las medidas de reparación a las que aspiran.

Sostiene que, por ello, se permite pedir al tribunal que se condene al Fisco de Chile al pago de una suma total de \$150.000.000 (ciento cincuenta millones de pesos) a don Lorenzo Alejandro Chavol Purran a título de indemnización por el daño moral que se le ha causado, como consecuencia directa de los crímenes cometidos en contra de su persona, a saber, la persecución, secuestro, y torturas sufridas, todas perpetradas por agentes del Estado de Chile, o bien, lo que esta judicatura determine en justicia; cantidad que deberá ser reajustada de acuerdo a la variación del IPC, desde la fecha de interposición de su demanda y el pago efectivo de la indemnización que se establezca, junto con los intereses legales correspondientes durante el mismo período, y las costas de la causa.

En consecuencia, solicita tener por interpuesta demanda de indemnización de daños y perjuicios en contra del Fisco de Chile, por la suma total de \$150.000.000 (ciento cincuenta millones de pesos) a don Lorenzo Alejandro Chavol Purran, por concepto de aquellos daños morales que ha padecido con ocasión de los hechos criminales cometidos por agentes del Estado, o bien, en su defecto, a la suma de dinero que este tribunal, en justicia, considere adecuada, cantidad que deberá ser reajustada de acuerdo a la variación del Índice de Precios al Consumidor, desde la fecha de interposición



de su demanda y el pago efectivo de la indemnización que en definitiva se establezca, junto con los intereses legales correspondientes durante el mismo período y las costas de la causa.

**Con fecha 19 de junio de 2023, a folio 9,** comparece doña Ruth Israel López, Abogada Procuradora Fiscal de Santiago del Consejo de Defensa del Estado, por el Fisco de Chile, quien contesta la demanda solicitando su rechazo, en base a las excepciones, defensas y alegaciones que expone.

En primer lugar, opone a la acción deducida la excepción de reparación integral por haber sido ya indemnizado el actor.

Refiere que no resulta posible comprender el régimen jurídico de este tipo de reparaciones por infracciones a los Derechos Humanos si no se posicionan correctamente estas indemnizaciones en el panorama jurídico nacional e internacional. En efecto, dicha comprensión sólo puede efectuarse al interior –y desde- lo que es común considerar como el ámbito de la llamada “Justicia Transicional”. Sólo desde esa óptica puede mirarse en mejores condiciones los valores e intereses en juego en esta disputa indemnizatoria.

Explica que el denominado dilema “justicia versus paz” es uno de los pilares sobre los cuales descansa el edificio de aquella justicia transicional. Argumentos en favor de amnistías generales que porten la necesaria tranquilidad a un país deben lidiar con la imperiosa necesidad de que una sociedad se mire a sí misma y reconozca los errores del pasado para así pronunciar aquel imperioso “nunca más”. En esta perspectiva, las transiciones son, y han sido siempre, medidas de síntesis mediante las cuales determinadas sociedades, en específicos momentos históricos, definen las proporciones de sacrificio de los bienes en juego al interior de aquel profundo dilema.

Asevera que no debe olvidarse que, desde la perspectiva de las víctimas, la reparación de los daños sufridos juega un rol protagónico en el reconocimiento de aquella medida de justicia por tantos años buscada. El éxito de los procesos penales se concentra sólo en el castigo de los culpables, no preocupándose del bienestar de las víctimas.

Agrega que las negociaciones entre el Estado y las víctimas revelan que tras toda reparación existe una compleja decisión de mover recursos económicos públicos, desde la satisfacción de un tipo de necesidades públicas



a la satisfacción de otras radicadas en grupos humanos más específicos. Este concurso de intereses o medida de síntesis se exhibe normalmente en la diversidad de contenidos que las Comisiones de Verdad o Reconciliación proponen como programas de reparación.

Refiere que estos programas incluyen beneficios educacionales, de salud, gestos simbólicos u otras medidas análogas diversas a la simple entrega de una cantidad de dinero, y que, en este sentido, no es un secreto que las transiciones han estado basadas en complejas negociaciones. Afirma que basta para ello revisar someramente las discusiones originadas en la aprobación de nuestra ley N°19.123 para darse cuenta del cúmulo de sensibilidades e intereses en juego en ella. No debe extrañar que muchas de esas negociaciones privilegien a algunos grupos en desmedro de otros cuyos intereses se estiman más lejanos, se compensen algunos daños y se excluyan otros o se fijen legalmente, luego de un consenso público, montos, medios de pago o medidas de daño.

Menciona que los objetivos a los cuales se abocó preferentemente el gobierno del Presidente Patricio Aylwin en lo que respecta a la justicia transicional fueron “(a) el establecimiento de la verdad en lo que respecta a las violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura; (b) la provisión de reparaciones para los afectados; y (c) el favorecimiento de las condiciones sociales, legales y políticas que prevean que aquellas violaciones puedan volver a producirse”.

Afirma que, en cuanto al segundo objetivo, la llamada Comisión Verdad y Reconciliación, o Comisión Rettig, en su Informe Final propuso una serie de “propuestas de reparación”, entre las cuales se encontraba una “pensión única de reparación para los familiares directos de las víctimas” y algunas prestaciones de salud. Dicho informe sirvió de causa a la Ley 19.123.

Sostiene que el mensaje de dicho proyecto de ley fue claro al expresar que por él se buscaba “reparar precisamente el daño moral y patrimonial que ha afectado a los familiares directos de las víctimas”.

Hace presente que el Ejecutivo entendió por reparación "un conjunto de actos que expresen el reconocimiento y la responsabilidad que le cabe al Estado en los hechos y circunstancias que son materia de dicho Informe". A



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: RQKCXSXTLX

dicha reparación ha de ser convocada toda la sociedad, en “un proceso orientado al reconocimiento de los hechos conforme a la verdad, a la dignificación moral de las víctimas y a la consecución de una mejor calidad de vida para las familias más directamente afectadas”. Compensación de daños morales y mejora patrimonial, son dos objetivos de estas normas reparatorias.

Adiciona que en la discusión de la ley 19.123 el objetivo indemnizatorio de este grupo de normas quedaría bastante claro. En diversas oportunidades se hizo referencia a la reparación “moral y patrimonial” buscada por el proyecto, y a la noción de reparación “por el dolor” de las vidas perdidas. También está presente en la discusión la idea de que el proyecto buscaba constituir una iniciativa legal “de indemnización” y reparación, e incluso se hace expresa referencia a que las sumas de dinero acordadas son para hacer frente la “responsabilidad extracontractual” del Estado.

Sostiene que esta idea reparatoria se plasmó de manera clara cuando dentro de las funciones de la Comisión se indicó que le corresponderá especialmente a ella promover “la reparación del daño moral de las víctimas” a que se refiere el artículo 18, y asumida esta idea reparatoria, la ley 19.123 y las demás normas conexas (como la ley 19.992) han establecido los mecanismos mediante los cuales se ha concretado esta compensación.

Expresa que, en ese orden de ideas, se puede indicar que la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos se ha realizado principalmente a través de tres tipos de compensaciones, a saber: a) Reparaciones mediante transferencias directas de dinero; b) Reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas; y c) Reparaciones simbólicas.

Hace presente que por medio de estos tres tipos de reparaciones se ha concretado el objeto del proceso de justicia transicional, que en lo que a este acápite respecta, busca no otra cosa que la precisa reparación moral y patrimonial de las víctimas. Un análisis de estas compensaciones habilitará al Tribunal a verificar el ámbito compensatorio que ellas han cubierto.

En cuanto a la reparación mediante transferencias directas de dinero, explica que diversas leyes han establecido este tipo de reparaciones, incluyendo también a quienes fueron víctimas de apremios ilegítimos. Destaca



que en la discusión legislativa de estas normas se enfrentaron dos posiciones: quienes sostenían que la reparación debía hacerse a través de una suma única de dinero, mientras otros abogaban por la entrega de una pensión vitalicia. Ello no implicaba que la primera opción tendría efectos indemnizatorios y no así la segunda; ambas modalidades tendrían fines innegablemente resarcitorios.

Manifiesta que, en términos de costos generales para el Estado, este tipo de indemnizaciones ha significado, a diciembre de 2019, en concepto de:

a) Pensiones: \$247.751.547.837.- como parte de las asignadas por la Ley 19.123 (Comisión Rettig) y de \$648.871.782.936.- como parte de las asignadas por la Ley 19.992 (Comisión Valech);

b) Bonos: \$41.910.643.367.- asignados por la Ley 19.980 (Comisión Rettig) y de \$23.388.490.737.- por la ya referida Ley 19.992.

c) Desahucio (Bono compensatorio): \$1.464.702.888.- asignados por medio de la Ley 19.123.

d) Bono Extraordinario (Ley 20.874): \$23.388.490.737.-

Indica que a diciembre de 2019 el Fisco había desembolsado la suma total de \$992.084.910.400.-, y que, siguiendo desde una perspectiva indemnizatoria, una pensión mensual es también una forma de reparar un perjuicio actual y, aunque ella comporte una sucesión de pagos por la vida del beneficiario, ello no obsta a que se pueda valorizar para poder saber cuál fue su impacto compensatorio.

Aduce que el cálculo de los efectos indemnizatorios de una pensión vitalicia puede realizarse simplemente sumando las cantidades pagadas a la fecha, como asimismo las mensualidades que todavía quedan por pagar, y que, como puede apreciarse, el impacto indemnizatorio de este tipo de pensiones es bastante alto. Ellas son una buena manera de concretar las medidas que la justicia transicional exige en estos casos, obteniéndose con ello compensaciones razonables que están en coherencia con las fijadas por los tribunales en casos de pérdidas culposas de familiares.

Señala que, en cuanto a las reparaciones específicas, el actor ha recibido beneficios pecuniarios al amparo de las leyes N°19.234 y 19.992 y sus modificaciones, agregando que la Ley 19.992 y sus modificaciones estableció





una pensión anual de reparación y otorgó otros beneficios a favor de las personas afectadas por violaciones de derechos humanos, estableciéndose una pensión anual reajutable de \$1.353.798.- para beneficiarios menores de 70 años, de \$1.480.284.- para beneficiarios de 70 o más años de edad y de \$1.549.422.- para beneficiarios mayores de 75 años de edad. Adicionalmente, el actor recibió en forma reciente el Aporte Único de Reparación Ley 20.784, por \$1.000.000.-.

En lo concerniente a las reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas, expone que la reparación no se realiza sólo mediante transferencias monetarias directas, sino que también a través de la concesión de diversos derechos a prestaciones. Menciona que el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU ha señalado que el objetivo de un programa de reparación es garantizar que todas las víctimas reciban un tipo de reparación, aunque no sea necesariamente de un mismo nivel o de la misma clase.

Indica que se concedió a los beneficiarios tanto de la ley 19.234 como de la ley 19.992, el derecho a gratuidad en las prestaciones médicas otorgadas por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS) en Servicios de Salud del país.

Añade que, a nivel presupuestario, PRAIS cuenta con un financiamiento de continuidad desde el año 2006. El año 2020, el Programa sostuvo un incremento presupuestario importante, siendo el presupuesto global de M\$6.543.883.-.

Señala que se les ofrece apoyo técnico y rehabilitación física para la superación de lesiones que sean producto de la prisión política o tortura, y que se establecen beneficios educacionales consistentes en la continuidad gratuita de estudios. Asimismo, se concedieron beneficios en vivienda, correspondientes al acceso a subsidios de vivienda.

Respecto de las reparaciones simbólicas, explica que parte importante de la reparación por los daños morales causados a las víctimas de derechos humanos se realiza a través de actos positivos de reconocimiento y recuerdo de los hechos que dieron lugar a aquellas violaciones. Este tipo de acciones pretende reparar, ya no a través de un pago de dinero paliativo del dolor, sino



tratando de entregar una satisfacción a esas víctimas que en parte logre reparar el dolor y la tristeza y con ello reducir el daño moral.

Arguye que la doctrina se ha inclinado por estimar que la indemnización del daño moral tiene precisamente un carácter satisfactivo, consistente en dar a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio, que le permita atenuar sus efectos, morigerándolos o haciéndolos más soportables. Refiere doctrina.

Asevera que, en esta compleja tarea de entregar una compensación satisfactiva, destaca la ejecución de diversas obras de reparación simbólica.

Asegura que, de todo lo expresado puede concluirse que los esfuerzos del Estado por reparar a las víctimas de derechos humanos han cumplido todos los estándares internacionales de Justicia Transicional y han provisto indemnizaciones acordes con nuestra realidad económica que han apuntado a compensar a las víctimas por los daños, tanto morales como patrimoniales, sufridos a consecuencia de las violaciones a los derechos humanos

Explica que tanto las indemnizaciones que se solicitan en estos autos como el cúmulo de reparaciones indicadas pretenden compensar los mismos daños ocasionados por los mismos hechos, y de esta forma, los referidos mecanismos de reparación han compensado aquellos daños, no procediendo, por ello, ser compensados nuevamente.

Esgrime que, en este punto, el fallo Domic Bezic, Maja y otros con Fisco ha sido especialmente gráfico cuando afirma que una pretensión indemnizatoria es incompatible con los beneficios legales entregados por la ley 19.123, adicionando que lo anterior ha sido ratificado por la Excma. Corte Suprema que, en sentencia de casación de fecha 30 de enero de 2013, reiteró la incompatibilidad de la indemnización pretendida con los beneficios de fuente estatal por los mismos hechos.

Refiere que diversas sentencias ya habían insistido en que el propósito de estas leyes fue precisamente “reparar el daño moral y patrimonial que ha afectado a los familiares directos de las víctimas”, lo que constituye un factor congruente con resoluciones de Tribunales Internacionales, relativas a la improcedencia de la indemnización.

Afirma que órganos internacionales como la Corte Interamericana de Justicia han valorado positivamente la política de reparación de violaciones de



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: RQKCXSXTLX

Derechos Humanos desarrollada por Chile, a tal punto que han denegado otro tipo de reparación pecuniaria luego de tomar en consideración los montos ya pagados por el Estado por conceptos de pensiones, beneficios y prestaciones públicas, y en el mismo sentido, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU ha considerado los beneficios de establecer un sistema compensatorio único para todas las víctimas que no genere desigualdades.

Refiere que un documento denominado “Herramientas Jurídicas para Estados Post-Conflictos” (Rule of Law for post-conflicts states) se ha referido expresamente a los programas de reparación. En él se ha reconocido la existencia de un problema al exigir indemnización por la vía de los programas de reparación y paralelamente, ejercer una acción civil, por la vía judicial.

Manifiesta que una vez que el Gobierno ha hecho esfuerzos de buena fe en crear un sistema administrativo que facilita la entrega de beneficios a las víctimas, permitir a los mismos beneficiarios iniciar litigios contra el Estado genera el peligro de obtener un doble beneficio por el mismo daño, y todavía peor, ello pone en riesgo el sistema de reparaciones en su totalidad, puesto que mientras el primer problema puede ser solucionado estipulando que no pueden perseguirse beneficios dos veces por la misma violación, el segundo no es fácilmente evitable toda vez que los beneficios obtenidos en los tribunales pueden sobrepasar a los de un programa masivo de reparaciones. Esto puede generar un cambio en las expectativas y generalizar una sensación de desilusión con los programas administrativos, e incluso este cambio puede ser motivado por casos que pueden no ser representativos del universo de víctimas y acentuar las desigualdades sociales entre ellas.

Expone que es el rechazo a nuevas peticiones de indemnización lo que fortalece los programas de Justicia Transicional, y dar lugar nuevamente a demandas de indemnización de perjuicios genera un acceso desigual a la justicia y a las reparaciones, debilitando la decisión política y administrativa de reparación.

Menciona que estando las acciones interpuestas basadas en los mismos hechos y pretendiendo indemnizar los mismos daños que han inspirado el cúmulo de acciones reparatorias enunciadas, opone la excepción de reparación integral por haber sido ya indemnizado el demandante.



Señala que, en subsidio de la excepción de reparación integral alegada, opone la excepción de prescripción de las acciones de indemnización de perjuicios con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil, en relación con lo dispuesto en el artículo 2497 del mismo Código, solicitando que, por encontrarse prescrita, se rechace la demanda en todas sus partes.

Expresa que, conforme al relato efectuado por el actor, la detención ilegal y tortura que sufrió tuvo lugar desde el día 29 de noviembre de 1973 y hasta por 2 meses y medio aproximadamente.

Manifiesta que entendiendo suspendida la prescripción durante la dictadura militar, por la imposibilidad de las víctimas de ejercer las acciones legales ante los tribunales hasta la restauración de la democracia, a la fecha de notificación de la demanda, esto es, el 30 de mayo de 2023, ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el artículo 2332 del Código Civil, y, en consecuencia, opone la excepción de prescripción de 4 años establecida en este mismo artículo, pidiendo que se acoja y se rechace íntegramente la acción indemnizatoria deducida como consecuencia de ello, por encontrarse prescrita.

En subsidio, en caso de que el tribunal estime que la norma anterior no es aplicable al caso de autos, opone la excepción de prescripción extintiva de 5 años contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2515, en relación con el artículo 2514 del Código Civil, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la anotada fecha de notificación de la acción civil, transcurrió con creces el plazo que establece el citado artículo 2515 del Código Civil.

Destaca que, por regla general, todos los derechos y acciones son prescriptibles, y, por ende, la imprescriptibilidad es excepcional y requiere siempre declaración explícita, la que en este caso no existe. Aduce que pretender que la responsabilidad del Estado sea imprescriptible, sin que exista un texto constitucional o legal expreso que lo disponga, llevaría a situaciones graves y perturbadoras.

Sobre esta materia, advierte que la prescripción es una institución universal y de orden público, y las normas del Código Civil, que la consagran, se han estimado siempre de aplicación general a todo el derecho y no sólo al



derecho privado. Cita el artículo 2497 del cuerpo legal citado, el cual consagra, con carácter obligatorio, el principio de que la prescripción afecta o favorece, sin excepciones, a las personas jurídicas de derecho público, a pesar de que éstas, como lo señala el artículo 547, inciso 2º, del Código Civil, se rijan por leyes y reglamentos especiales.

Explica que la prescripción es una institución de aplicación general en todo el ámbito jurídico y de orden público, pues no cabe renunciarla anticipadamente (artículo 2494, inciso 1º, del Código Civil).

Manifiesta que la responsabilidad que se atribuye al Estado y en contra de particulares tienen la misma finalidad: resarcir un perjuicio extrapatrimonial, a través de un incremento patrimonial del afectado.

Hace presente que la prescripción tiene por fundamento dar fijeza y certidumbre a toda clase de derechos emanados de las relaciones sociales y de las condiciones en que se desarrolla la vida, y es una institución estabilizadora e indispensable en nuestro orden social. Por lo mismo, no es una sanción para los acreedores y un beneficio para los deudores, que son consecuencias indirectas de la protección del interés general referido.

Agrega que la prescripción no exime la responsabilidad ni elimina el derecho a la indemnización, solamente ordena y coloca un necesario límite en el tiempo para que se deduzca en juicio la acción, y que no hay conflicto alguno entre la Constitución Política y la regulación del Código Civil. Lo habría si aquellos textos prohibieran la prescripción o si el derecho interno no admitiere la reparación vía judicial oportunamente formulada. En ausencia de ese conflicto, no hay contradicción normativa.

Asevera que, en la especie, el ejercicio de las acciones ha sido posible durante un número significativo de años, desde que el demandante estuvo en situación de hacerlo.

Menciona que, como es de público conocimiento, nuestra Corte Suprema, en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 780 del Código de Procedimiento Civil dictó, el 21 de enero de 2013, una histórica sentencia de unificación de jurisprudencia de demandas de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile por hechos acaecidos entre el 11 de septiembre de



1973 y el 11 de marzo de 1990, y en dicha sentencia, nuestro Máximo Tribunal en Pleno, zanjó esta controversia, señalando:

1º) Que el principio general que debe regir la materia es el de la prescriptibilidad de la acción de responsabilidad civil, de modo que la imprescriptibilidad debe, como toda excepción, ser establecida expresamente y no construida por analogía o interpretación extensiva;

2º) Que los tratados internacionales invocados, especialmente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Convenio de Ginebra sobre Tratamiento de los Prisioneros de Guerra y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, no contienen norma alguna que declare imprescriptible la responsabilidad civil; la imprescriptibilidad que algunos de ellos establecen se refiere sólo a la responsabilidad penal;

3º) Que no existiendo una norma especial que determine qué plazo de prescripción debe aplicarse en estos casos, debe recurrirse al derecho común, que en esta materia está representado por la regulación del Código Civil relativa a la responsabilidad extracontractual, y en particular por el artículo 2332 que fija un plazo de cuatro años desde la perpetración del acto;

4º) Que, no obstante la letra de dicho precepto, el plazo debe contarse no desde la desaparición del secuestrado (detención del demandante en este caso), sino desde que los titulares de la acción indemnizatoria tuvieron conocimiento y contaron con la información necesaria y pertinente para hacer valer el derecho al resarcimiento del daño ante los tribunales de justicia.

Indica que las sentencias anteriores y posteriores al citado fallo no hacen más que reiterar la misma doctrina, constituyendo jurisprudencia contundente en la materia, lo que solicita se tenga en consideración al momento de resolver la presente Litis, tal como ha resuelto el Pleno de nuestro Excmo. Tribunal, en sentencia de fecha 21 de enero de 2013 que acogió la aplicación de la institución de la prescripción en materias como la de autos.

Sostiene que la indemnización de perjuicios, cualquiera sea el origen o naturaleza de estos, no tiene un carácter sancionatorio, de modo que jamás ha de cumplir un rol punitivo para el obligado al pago, y su contenido es



netamente patrimonial. De allí que no ha de sorprender ni extrañar que la acción destinada a exigirla esté expuesta a extinguirse por prescripción.

Advierte que, como en forma reiterada se ha planteado por la doctrina fiscal sustentada en sus diversas defensas y lo ha recogido la jurisprudencia, en la especie se ha ejercido una acción de contenido patrimonial que persigue hacer efectiva la responsabilidad extracontractual del Estado, por lo que no cabe sino aplicar, en materia de prescripción, las normas del Código Civil, lo que no contraría la naturaleza especial de la responsabilidad que se persigue, en atención a que la acción impetrada pertenece al ámbito patrimonial.

Afirma que basta considerar que el derecho a indemnización puede ser y ha sido objeto de actos de disposición, tales como renuncia o transacción, incluso en casos de violaciones a los Derechos Humanos, por lo que no existe fundamento plausible para estimar que se trata de acciones ajenas a la prescripción liberatoria que no es sino una suerte de renuncia tácita por el no ejercicio oportuno de las acciones.

Expone que, finalmente, aun cuando el demandante formula alegaciones en cuanto a que la acción patrimonial que persigue la reparación por los daños reclamados sería imprescriptible conforme al derecho internacional de los derechos humanos, basándose en ciertos instrumentos internacionales, como la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad, los Convenios de Ginebra de 1949, la Resolución N°3.074 de 3 de diciembre de 1973 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y la Convención Americana de Derechos Humanos, concluye que ninguno contempla la imprescriptibilidad de las acciones civiles derivadas de delitos o crímenes de lesa humanidad o que prohíba o impida la aplicación del derecho interno en esta materia.

Expresa que su planteamiento ha sido reconocido por la Excma. Corte Suprema, que ha desestimado la aplicación de esa normativa en diversos fallos, como lo ha establecido conociendo del recurso de casación interpuesto en los autos N°1.133-06, caratulados “Neira Rivas, Gloria con Fisco de Chile”, de 24 de julio de 2007, y lo mismo aconteció en la sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema, acogiendo un recurso de casación en el fondo



deducido por el Fisco, en la causa “Martínez Rodríguez y otra con Fisco de Chile”, autos N°4.067-2006, en fallo de fecha 29 de octubre de 2007.

Refiere que no habiendo norma expresa de derecho internacional de derechos humanos, debidamente incorporada a nuestro ordenamiento jurídico interno, que disponga la imprescriptibilidad de la obligación estatal de indemnizar, y no pudiendo tampoco aplicarse por analogía la imprescriptibilidad penal en materia civil, el tribunal no debe apartarse del claro mandato de la ley interna al resolver esta contienda y aplicar las normas contenidas en los artículos 2332 y 2497 del Código Civil, que establecen las reglas sobre prescriptibilidad de la responsabilidad patrimonial del Estado.

Concluye que, con el mérito de lo expuesto precedentemente, el tribunal deberá rechazar la demanda por encontrarse prescrita la acción deducida.

En subsidio de las defensas y excepciones precedentes, formula las siguientes alegaciones en cuanto a la naturaleza de la indemnización solicitada y al excesivo monto pretendido de \$150.000.000.-.

En relación al daño moral, hace presente que no puede dejar de considerarse que éste consiste en la lesión o detrimento que experimenta una persona, en general, en sus atributos o cualidades inmateriales, lo que dependerá, de las secuelas sufridas con motivo de los hechos señalados en el libelo y de conformidad a los antecedentes que obren en autos en la etapa probatoria del mismo.

Refiere que los llamados daños no patrimoniales recaen sobre elementos de difícil o imposible estimación pecuniaria, ya que su contenido no es económico, o al menos no directamente. Ello produce a su respecto una imposibilidad latente e insuperable de evaluación y apreciación pecuniaria.

Indica que la indemnización de perjuicios tiene por objeto restablecer el equilibrio destruido por el hecho ilícito, otorgando a la víctima un valor equivalente a la cuantía del daño sufrido, para ponerla en el mismo estado que tenía antes del acto dañoso.

Añade que la indemnización del daño puramente moral no se determina cuantificando, en términos económicos, el valor de la pérdida o lesión experimentada, sino sólo otorgando a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita atenuar el daño, morigerarlo o hacerlo más soportable,





mediante una cantidad de dinero u otro medio, que en su monto o valor sea compatible con esa finalidad meramente satisfactiva.

Señala que es en la perspectiva antes indicada que hay que regular el monto de la indemnización que debe ser un procedimiento destinado a atenuar los efectos o el rigor de la pérdida extrapatrimonial sufrida.

Hace presente que tampoco resulta procedente invocar la capacidad económica de las partes como elemento para fijar la cuantía de la indemnización, pues el juez sólo está obligado a atenerse a la extensión del daño sufrido por la víctima, en la cual no tienen influencia estas capacidades.

Menciona que, no habiendo norma legal que establezca una excepción relativa a la capacidad económica, habrá de estarse al principio general y básico de la cuantificación conforme a la extensión del daño, con absoluta prescindencia del patrimonio obligado al pago. Advierte que las cifras pretendidas en la demanda como compensación del daño moral resultan excesivas, teniendo en consideración las acciones y medidas de reparación adoptadas por el Estado y los montos promedios fijados por los tribunales, que en esta materia han actuado con mucha prudencia.

Refiere que la Corte de Apelaciones de Santiago ha resuelto en materia similar a la de autos que para fijar el quantum debe acudir al principio de prudencia que conduce la proporcionalidad. Cita la sentencia de segunda instancia dictada en recurso de apelación Ingreso Corte 6891-2013.

En subsidio de las excepciones de reparación integral y prescripción extintiva de las acciones deducidas, alega en todo caso que en la fijación del daño moral por los hechos de autos, el tribunal debe considerar todos los pagos recibidos por el actor a través de los años por parte del Estado conforme a las leyes de reparación (19.123, 19.234, 19.992, sus modificaciones y demás normativa pertinente), y que seguirá percibiendo a título de pensión, y también los beneficios extrapatrimoniales que estos cuerpos legales contemplan, pues todos ellos tienen por objeto reparar el daño moral, y no accederse a esta petición subsidiaria implicaría un doble pago por un mismo hecho, lo cual contraría los principios jurídicos básicos del derecho en orden a que no es jurídicamente procedente que un daño sea indemnizado dos veces.



Arguye que para la adecuada regulación y fijación del daño moral deben considerarse como parámetro válido los montos establecidos en las sentencias de los tribunales en esta materia, lo que implica rebajar sustancialmente los montos pecuniarios demandados.

Además, hace presente que los reajustes sólo pueden devengarse en el caso de que la sentencia que se dicte en la causa acoja la demanda y establezca esa obligación, y desde que dicha sentencia se encuentre firme o ejecutoriada.

Indica que, a la fecha de interposición o notificación de la demanda, y mientras no exista sentencia firme o ejecutoriada, ninguna obligación tiene su representado de indemnizar, y, por tanto, no existe ninguna suma que deba reajustarse.

Afirma que lo anterior implica que los reajustes que procedieren de ninguna manera podrían contabilizarse desde una fecha anterior a aquella en que la sentencia que los concede se encuentre firme o ejecutoriada. El reajuste es un mecanismo económico-financiero que tiene por objeto neutralizar el efecto que los procesos inflacionarios o deflacionarios tienen sobre la moneda de curso legal. Desde esta perspectiva, no procede aplicar la corrección monetaria a partir de una fecha que precede a la determinación del monto por sentencia ejecutoriada.

Respecto de los intereses, expone que el artículo 1551 del Código Civil establece que el deudor no está en mora sino cuando ha sido judicialmente reconvenido y ha retardado el cumplimiento de la sentencia, y la jurisprudencia de nuestros tribunales superiores así lo ha decidido. Por consiguiente, en el caso de que el tribunal decida acoger la acción y condene a su representado al pago de una indemnización de perjuicios, tales reajustes e intereses sólo podrán devengarse desde que la sentencia condenatoria se encuentre firme o ejecutoriada y su representado incurra en mora.

En consecuencia, solicita tener por contestada la demanda civil deducida en autos y, en definitiva, conforme a las excepciones, defensas y alegaciones opuestas, se rechace dicha acción indemnizatoria en todas sus partes, con costas; o, en subsidio, se rebaje sustancialmente el monto indemnizatorio pretendido.



**Con fecha 11 de julio de 2023, a folio 13,** la parte demandante evacúa el trámite de la réplica, reiterando todos los fundamentos de hecho y de derecho expuestos en la demanda, los que da por reproducidos, agregando ciertas consideraciones.

Sobre la excepción de “reparación satisfactiva o integral”, denominada también “excepción de pago”, alegada por el Consejo de Defensa del Estado, en consideración a que el demandante, don Lorenzo Chavol Purran ya ha sido indemnizado en virtud de la ley 19.123, que creó la “Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación”, y fundamentalmente por los beneficios pecuniarios percibidos al amparo de las leyes N°19.234 y N°19.992 y sus modificaciones posteriores, la parte controvierte señalando que, en el mejor de los casos, los montos que otorgan las referidas leyes sólo constituyen pensiones de sobrevivencia por los brutales actos cometidos por el Estado en el período comprendido entre 1973 y 1990. En ningún caso dichas pensiones reparan íntegramente el dolor experimentado por el demandante en su calidad de víctima directa de violaciones graves a sus derechos humanos y fundamentales.

Fundamenta que nunca un tribunal de la República ha fijado el monto de la reparación que debería obtener, por lo que no sería entonces un crédito líquido y actualmente exigible. Afirmar que desde el punto de vista jurídico no cabe acoger la excepción alegada, aunque destaca que es razonable que el Fisco reconozca por medio de sus alegaciones que se produjo un crimen de lesa humanidad y que ese crimen produjo un daño moral a la víctima directa.

Añade que los pagos que realiza el Fisco de Chile implican un acto real y un reconocimiento implícito y explícito de la responsabilidad que le cabe, extinguiendo de tal manera la prescripción de la acción que más tarde alega.

Refiere que el Fisco de Chile vuelca su mejor empeño interpretativo y argumentativo para sostener esta defensa, señalando que en la discusión de la Ley N°19.123, el objetivo de este tipo de normas quedó bastante claro.

Refiere que la noción de reparación por el dolor de las vidas perdidas se encuentra en diversos pasajes de la discusión. También está presente, según el Fisco de Chile, la idea de que el proyecto buscaba constituir una iniciativa legal de indemnización y de reparación. En definitiva, explica que las



diferentes leyes de reparación han establecido diversos mecanismos mediante los cuales se ha concretado esta compensación (sic).

Rebate señalando que la Ley N°19.123 que el demandado esgrime como justificación para decir que el daño moral ya está resarcido, en su artículo 2 establece que “Le corresponderá especialmente a la Corporación (...) Promover la reparación del daño moral de las víctimas”, sosteniendo que la palabra promover no es sinónimo de reparar.

Expresa que el sentimiento de injusticia de su representado y de no haber sido compensado ni reparado, subsiste intacto e irreductible hasta el día de hoy.

Agrega que la propia Ley 19.123 no considera incompatibles la pensión de sobrevivencia con una eventual indemnización de perjuicios que repare el daño moral, según el tenor inequívoco de su artículo 24, entonces, con menor razón podría el intérprete de la ley descartar la procedencia de la pretensión indemnizatoria por el solo hecho de haber mediado el pago de una pensión como ocurre en este caso concreto. En otras palabras, al no establecer la ley en comentario incompatibilidad alguna entre ser beneficiario de la pensión de reparación y demandar por daños en sede civil por el mismo asunto, de suyo insostenible deviene la excepción de reparación integral invocada por el Fisco de Chile, de la forma que también ha sido entendido por los tribunales superiores de justicia, como en la causa “Valencia Oyarzo Eliecer con Fisco de Chile”.

Añade que, a mayor abundamiento, nos encontramos con una norma rectora establecida en el artículo 76 de La Constitución Política de la República, por el cual el razonamiento expuesto por el demandado no resulta concordante con la Carta Fundamental, ya que basarse en la Ley N°19.123, y muy especialmente en la Ley N°19.992 y sus modificaciones, para decir que el daño moral ya está reparado llevaría necesariamente a la conclusión de que el Congreso de Chile estaría avocándose al conocimiento y resolución de una causa judicial pendiente, y ello es abiertamente inconstitucional.

Argumenta que, si se aceptara la tesis Fiscal, el monto de la reparación que han recibido las víctimas estaría fijado de forma unilateral y absolutamente arbitraria por el responsable, es decir el Estado de Chile, y le



estaría vedado a las víctimas discutirlo, afirmando que un razonamiento así es contrario a cualquier principio básico del Derecho.

Respecto a la excepción de prescripción extintiva, expresa que es insostenible afirmar que las únicas reglas que existen en Chile para regular la responsabilidad del Estado son aquellas contenidas en el Código Civil, por cuanto trae aparejada la negación rotunda de la validez y eficacia de otras normas jurídicas de carácter constitucional, administrativo e internacional que, por lo demás, ya han sido aplicadas por nuestros tribunales superiores en materia de violaciones graves a los derechos humanos, incluyendo entre ellos, por cierto, a la Excelentísima Corte Suprema. Al respecto, cita los casos “Caro con Fisco de Chile”, y “Bustos con Fisco”.

Argumenta que el demandado incurre en un error jurídico al sostener que este litigio se debe resolver haciendo uso de categorías propias del Derecho Privado, lo que resulta improcedente a la luz de la denominada doctrina de los actos propios, así como a la buena fe que debe orientar las defensas de las partes, toda vez que se alega en autos la “inexistencia de un régimen especial de responsabilidad del Estado” basado en que “el derecho común en materia de responsabilidad extracontractual, se encuentra contenido en nuestro Código Civil en el Título XXXV, denominado De los Delitos y Cuasidelitos, artículos 2314 y siguientes”. Señala que resulta incompatible y contraria a la línea de defensa que históricamente ha planteado el Consejo de Defensa del Estado sosteniendo en latas argumentaciones los poderes exorbitantes de la Administración reclamando privilegios que se apartan de la noción clásica del Derecho Público, donde sí reconoce la existencia de normas especiales que regulan la actividad administrativa, abogando por la teoría de los poderes implícitos por la función de servicio público que desarrolla.

Refiere que dicha institución ha negado jurisdicción y competencia a los tribunales ordinarios para conocer de las acciones de los administrados que reclaman de sus actuaciones. Sin embargo, ha requerido de esos mismos tribunales y en los mismos juicios, que resuelvan en su favor, en particular respecto a la excepción que interpone, como es el caso sublite.

En este orden de ideas, la doctrina de los actos propios consiste simplemente en castigar como “inadmisible toda pretensión contradictoria con



comportamientos observados anteriormente por el mismo sujeto que hace valer dicha pretensión” (Cfr. Pardo De Carvallo, Inés. La doctrina de los Actos Propios. Revista de Derechos de la U. Católica de Valparaíso XIV, 1991-1992. P. 67). En tal sentido ha fallado uniformemente nuestra Corte Suprema de Justicia en reiteradas oportunidades.

Argumenta que la acción no estaría prescrita por las siguientes razones:

1.- La acción constitucional, para hacer efectiva la responsabilidad extracontractual del estado no establece plazo de prescripción (artículo 38º inciso 2º de la Constitución Política de la República).

2.- El demandado no (re) conoce la pertinencia en este asunto de las reglas de responsabilidad contenidas en la “Convención Americana sobre Derechos Humanos”, pues insiste en sostener una interpretación antojadiza y/o reduccionista no solo de las leyes que componen el ordenamiento jurídico interno, sino que también del marco regulatorio internacional de los Derechos Humanos.

Manifiesta que de acuerdo con la “Convención Americana sobre Derechos Humanos” es un error ignorar el hecho que ésta ha regulado el deber de reparar el mal causado que pesa sobre todo Estado que ha violado los derechos fundamentales de sus habitantes. Al respecto, basta tener a la vista el artículo 63 de la citada Convención junto con la enorme cantidad de jurisprudencia que, desde hace varios años, viene dictando la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a la forma correcta de interpretar y aplicar dicho artículo.

Afirma que el sostener que el caso de autos está prescrito es erróneo toda vez que se construye sobre un supuesto teórico que afirma la desconexión total de las acciones civiles con las penales, esto es: que sería posible castigar a los responsables y al mismo tiempo dejar sin reparación a las víctimas.

Refiere que la prescripción extintiva constituye una sanción o pena civil toda vez que el titular de un derecho que no solicita al órgano jurisdiccional su reconocimiento en el tiempo que el legislador contempla verá extinguirse su acción para exigir su cumplimiento. En tal sentido, el profesor Carlos Ducci enseña que la interpretación estricta y/o restrictiva, que se funda en motivos lógicos o en el respeto a los derechos individuales, se aplica en primer término



a las leyes penales, debiendo hacerse presente que la jurisprudencia ha dado el carácter de pena a las sanciones en general, más allá del campo estrictamente penal.

Indica que la evidente naturaleza sancionatoria del instituto de la prescripción extintiva impide que esta sea aplicada por analogía, con mayor razón cuando su aplicación analógica se contrapone a los principios que informan tanto el Derecho Público en general y el Administrativo en particular, así como - y muy especialmente - los que subyacen en el Derecho Internacional de los Derechos humanos. Refiere que pretender integrar la ausencia de normativa que regule la prescripción extintiva en el caso sub lite mediante la aplicación analógica de las normas del Código Civil, considerándolo como derecho común y supletorio a todo el ordenamiento jurídico, resulta exagerado y desproporcionado, en tanto niega la distinción entre Derecho Público y Derecho Privado, así como la particularidad de las relaciones jurídicas que cada uno de tales estatutos regula: El Derecho Privado regula las relaciones desde un plano de igualdad con plena autonomía de las personas para obligarse y cuyo fin es el bien particular en tanto su objeto es el intercambio de bienes. El Código Civil es supletorio al Derecho Privado, al que orienta. El Derecho Público, en cambio, regula la relación de los particulares frente al Estado cuyo fin es el bien común basado en los principios de juridicidad y supremacía constitucional. Más aún, luego del advenimiento de la 2ª guerra mundial y la experiencia aciaga que significó el régimen nazi, surge fuertemente la necesidad de limitar el poder y arbitrariedad del Estado, modificando radicalmente la concepción de la soberanía estatal, limitando su ejercicio al respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana dando vida al complejo normativo de los Derechos Humanos. De este modo, la evolución de las ciencias jurídicas ha permitido establecer principios y normas propias para determinadas materias, lo cual el mismo Código Civil reconoce en su artículo 4º al estipular que las disposiciones particulares “se aplicaran con preferencia a las de este Código”.

Concluye que la ausencia de norma expresa que regule la prescripción extintiva de las acciones de reparación por violación de los derechos humanos de las personas debe ser resuelta e integrada mediante la interpretación



armónica de las normas y principios del Derecho Público tanto como del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, quedando proscrita la aplicación analógica de los artículos 2332, 2514 y 2515 del Código Civil, ya por su naturaleza ciertamente sancionatoria, ya por la contrariedad de los fines y postulados que informan al Derecho Privado y al Público, ya por la disparidad de las situaciones que se busca regular: mientras el Código Civil regula relaciones de tipo contractual vinculada a un negocio común o bien daños derivados de delitos o cuasidelitos civiles, aquí nos encontramos frente a delitos de la mayor gravedad que importan una afrenta hacia la comunidad internacional en su conjunto. Así, al no existir una similitud en las situaciones fácticas no resulta viable la analogía que supone hechos de igual valor que implique iguales consecuencias jurídicas.

Sobre el derecho aplicable, explica que existe un debate dogmático sobre la naturaleza de la responsabilidad del Estado y el estatuto jurídico aplicable. Cualquier estatuto que se aplique llevará a la misma conclusión: la existencia de la responsabilidad del Estado, por hechos que causan daño y que los particulares afectados no tienen obligación jurídica de soportar tales daños. En un Estado de Derecho real el principio de la responsabilidad es de la esencia del mismo. Los daños causados por el Estado literalmente “se pagan”.

Señala que el derecho citado por las partes no es vinculante para el jurisdiscente. Este será el que soberanamente aplique el derecho al caso concreto. Ese derecho que se construye desde las normas constitucionales que conforman las bases de la institucionalidad hasta las legales, no olvidando las internacionales vinculantes para el Estado de Chile, a propósito del inciso 2º del artículo 5 de la Constitución Política.

Respecto a la Jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, señala que respecto de la afirmación que realiza el demandado en relación a que la Corte Suprema ya ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre la prescripción extintiva, si bien ello es cierto, la más reciente jurisprudencia de la Excma. Corte ha variado el criterio otorgándole el carácter de imprescriptibles a las acciones civiles que derivan de estos crímenes, concediendo así la correspondiente indemnización.





En relación con el monto demandando, refiere que no hay dinero que supla el dolor experimentado por el demandante.

**Con fecha 27 de julio de 2023, a folio 15,** la parte demandada evacuó el trámite de dúplica, mediante la cual reiteró todas las alegaciones, excepciones y defensas planteadas en su contestación, en cuyo mérito solicita el rechazo de la acción.

Reitera lo señalado en relación a la excepción de reparación satisfactiva, en cuanto a que el daño moral ya ha sido indemnizado, por lo que procede se haga lugar a la excepción alegada. Respecto al marco general de las reparaciones ya otorgadas, destaca el esfuerzo que ha realizado el Estado de Chile para compensar el daño producido a las víctimas, y en especial, respecto a las reparaciones percibidas por el demandante, ya sea en forma de transferencias directas en dinero, mediante la asignación de nuevos derechos sobre prestaciones estatales específicas y mediante el conjunto de reparaciones simbólicas mencionadas en la contestación.

En relación a la prescripción de las acciones deducidas en este juicio, refiere a la importancia de la sentencia de unificación de jurisprudencia dictada por el Pleno de la Excma. Corte Suprema con fecha 21 de enero de 2013 en los autos rol 10.665-2011 “Episodio Colegio Médico-Eduardo González Galeno” transcrita en sus principales argumentos en el escrito de contestación a la demanda, donde se concluye que las acciones por responsabilidad extracontractual en contra del Estado prescriben en el plazo de 4 años desde la perpetración de los hechos, conforme a lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil.

Afirma que en esta materia se aplica el artículo 2332 del Código Civil que dispone un plazo de cuatro años en la cual prescribe la acción por responsabilidad extracontractual en contra del Estado. La aplicación de esta norma está regulada en el artículo 2497 del mismo cuerpo legal, que señala expresamente que las normas de prescripción se aplican “a favor y en contra del Estado”.

Agrega que la Excma. Corte ha dejado claramente establecido que los tratados internacionales sobre derechos humanos no impiden en modo alguno la aplicación del derecho interno, específicamente las normas sobre



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: RQKCXSXTLX

prescripción de la acción civil. En el fallo dictado por el Pleno de la Excma. Corte queda ampliamente establecido que ni la Convención Americana sobre Derechos Humanos y tampoco la Convención de Ginebra contienen normas que declaren imprescriptible la acción civil o impidan a cada Estado aplicar su legislación interna sobre la materia. Al respecto, cita la sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema, con fecha 16 de marzo de 2016.

En cuanto a las alegaciones vertidas por la parte demandante relativas al monto demandado y los reajustes e intereses, reproduce en forma expresa las alegaciones vertidas en la contestación de la demanda.

**Con fecha 14 de agosto de 2023, a folio 16,** se recibió la causa a prueba rindiéndose la que consta en autos.

**Con fecha 09 de diciembre de 2024, a folio 60,** se citó a las partes a oír sentencia.

#### **CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que, a folio 1, comparece Nelson Guillermo Caucoto Pereira, y Francisco Félix Bustos Bustos, abogados, en representación de don Lorenzo Alejandro Chavol Purrán, quien deduce demanda de indemnización de perjuicios, en juicio de hacienda, en contra del Fisco de Chile, solicitando se le condene al pago de la suma de \$150.000.000.-, más intereses, reajustes legales y costas; o, en subsidio, lo que este tribunal estime de justicia y equidad, debidamente reajustado, con intereses y costas.

**SEGUNDO:** Que, a folio 9, comparece doña Ruth Israel López, Abogada Procuradora Fiscal de Santiago del Consejo de Defensa del Estado, por el Fisco de Chile, quien contesta la demanda solicitando su rechazo, de acuerdo a los fundamentos de hecho y de derecho reseñados en lo expositivo de esta sentencia.

**TERCERO:** Que la parte demandante, a fin de acreditar los hechos en que funda su acción, acompañó al proceso los siguientes documentos, en forma legal y no objetados:

##### A folio 1:

1.- Copia de certificado de Nacimiento de don Lorenzo Alejandro Chavol Purrán, emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación con fecha 01 de diciembre de 2022.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: RQKCXSXTLX

2.- Copia de certificado de Antecedentes valido para fines especiales, sin antecedentes, emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación con fecha 05 de diciembre de 2022.

4.- Certificado suscrito por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, con fecha 29 de agosto de 2019, respecto de don Lorenzo Alejandro Chavol Purrán, que certifica que se encuentra calificado como víctima reconocida por la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura.

5.- Copia de la página 151 del Informe Valech I.

6.- Copia de Carpeta de Antecedentes entregada ante la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, por don Lorenzo Alejandro Chavol Purrán.

7.- Informe por daño asociado a violencia política, relativo a don Lorenzo Alejandro Chavol Purrán, suscrito por Gemita Erices Petit Laurent, asistente social, Claudio Ovando Gatica, psicólogo, y Andrea Rebolledo Quintana, asistente social encargada, todos del programa PRAIS del Servicio de Salud Araucanía Norte.

8.- Certificado Médico de fecha 05 de diciembre de 2022, emitido por la Medica-Cirujana general Dra. Sofía Cortés Orrego del Centro de Salud Familiar Victoria, que da cuenta que don Lorenzo Alejandro Chavol Purrán se encuentra en controles crónicos por Diabetes Mellitus Tipo 2, diagnosticada en diciembre de 2022.

A folio 37:

9.- Sentencia dictada por la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago en Causa Rol 1092-2015 con fecha 14 de septiembre de 2015.

10.- Sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema en Causa Rol 8105-2018 con fecha 13 de junio de 2018.

11.- Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Órdenes Guerra y otros vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2018.

**CUARTO:** Que con fecha 17 de octubre de 2024, a folio 54, la parte demandante rindió prueba testimonial consistente en las declaraciones de Juan Segundo Méndez González, Isaías Enos Colihuinca Quincha, y Juan Luis



Cayupán Regle, quienes legalmente juramentados y libres de tachas expusieron lo siguiente.

1.- Testigo Juan Segundo Méndez González:

Al punto de prueba N°1 “Existencia del daño moral hechos constitutivos del mismos”, declara: “Conozco a Lorenzo Chavol desde aproximadamente el año 1968 a la fecha y en ese tiempo vivía en la Comunidad Chavol de esta Comuna de Victoria y al frente de su casa había una Parcela de 120 hectáreas de propiedad de don German Gebert de la Localidad de Quino, la cual cuidaba mi padre y yo vivía con él.

El señor Chavol en ese tiempo era mimitante del partido Comunista y a su vez era el dirigente de la Comunidad Chavol y nos veíamos constantemente, en el año 1972 aproximadamente le entregaron a la Comunidad la parcela de 120 hectáreas y a mi madre le regalaron la casa para que se la llevara donde ella quisiera y nosotros nos fuimos de ese lugar.-

En el año 1973 en el mes de Noviembre Lorenzo Chavol fue detenido y llevado al Reten de Carabineros que existía en la Localidad de Quino y desde ahí fue trasladado a la ciudad de Victoria a la cárcel donde estuvo detenido un par de meses por la militancia política. Cuando lo detuvieron lo golpearon mucho al igual cuando fue traslado a la Cárcel. Lo interrogaban constantemente y lo golpeaban. Debido a esta situación y las golpizas que tuvo quedo con problemas a los pulmones y tiene que estar constantemente en médicos.-

Todo esto me consta porque como he dicho lo conozco desde hace muchos años a la fecha y el mismo me ha comentado todo lo que le sucedió.”

Repreguntado el testigo para que aclare si observó algún cambio de carácter o de ánimo en don Lorenzo después de las detenciones que sufrió respecto a como era el antes de las detenciones, responde: “sí, lo primero que el después de las detenciones se encerró en su casa y no quería salir a ninguna parte porque lo podrían volver a detener ya que quedó en libertad condicional.- Al ver a carabineros en la calle el arrancaba ya que tenía miedo”.

Repreguntado sobre algún ejemplo de otros tipos de daños por ejemplo familia, económico, laboral o emocional en don Lorenzo y su familia como consecuencia de las detenciones y agresiones sufridas, el testigo responde: “en



lo económico después de las detenciones no encontraba trabajo y esto perjudico a la familia; en lo emocional el quedo choqueado y los que más sufrieron fueron los niños ya que cuando veían a Carabineros ellos arrancaban y se escondían”.

## 2.- Testigo Isaías Enos Colihuinca Quincha:

Al punto de prueba N°1 “Existencia del daño moral hechos constitutivos del mismos”, declara: “Yo soy hijo de un político Mapuche que fue muerto por la dictadura que fue mi padre don Juan Antonio Colihuinca Railaf, él fue amigo y conocido de don Lorenzo Chavol, en el año 1972 en adelante, mi padre fue fundador del Sindicato el Toqui de la Comuna de Victoria y Lorenzo pertenecía a este Sindicato y era socio.-

En el año 1973 cuando se produjo el Golpe de Estado fueron detenidos varios dirigentes mapuche, incluyendo a Lorenzo Chavol, y lo derivaron a la cárcel de Victoria junto a mi padre y cuando yo lo visitaba los veía a ambos y ellos nos hablaban en mapudungun y nos contaban como habían sido agredidos, golpeados por Carabineros y militares.-

Nosotros todos los Domingos los visitábamos y teníamos que llevarles comida ya que le daban muy poca y nos encontrábamos siempre con los familiares de don Lorenzo.-

A mi padre lo soltaron a los tres meses aproximadamente y a Lorenzo a los 5 meses aproximadamente.-

Mi padre lo visitaba constantemente después que salió de la cárcel, ya que Lorenzo fue muy golpeado y solo se encontraba en su casa no salía a ninguna parte.-

Después que salió de la cárcel Lorenzo Chavol se vio acabado, enfermizo y actualmente se encuentra mal de salud. Todo esto me consta porque como he dicho lo conozco desde hace muchos años a la fecha y mi padre y el mismo me ha comentado todo lo que le sucedió”.

Repreguntado el testigo sobre algún ejemplo de otros tipos de daños por ejemplo familiar, económico, laboral o emocional en don Lorenzo y su familia como consecuencia de las detenciones y agresiones sufridas, contesta: “el daño económico fue muy grande ya que el Gobierno le quito la tierra que le había dado y él no tenía nada, no tenía trabajo, se lo pasaba cesante, solo se



mantenía con las cosas básicas, vendiendo huevos, verduras, etc, y con el problema en sus pulmones por los golpes él no podía trabajar”.-

3.- Testigo Juan Luis Cayupán Regle:

Al punto de prueba N°1 “Existencia del daño moral hechos constitutivos del mismos”, declara: “Referente a lo que se me pregunta puedo manifestar que en el año 1973 yo tenía 15 años de edad y yo lo veía que Lorenzo Chavol se escondía cuando veía a los Uniformados ya que lo andaban buscando, y cuando lo pillaron lo tuvieron detenido un par de meses y en los interrogatorios lo golpearon mucho.-

Todo esto me consta porque como he dicho lo conozco desde hace muchos años a la fecha”.

Repreguntado el testigo sobre si observó algún cambio de carácter o de ánimo en don Lorenzo después de las detenciones que sufrió respecto a como era él antes de las detenciones, el testigo responde: “sí, cambió hartito estaba más flaco y pálido es lo que vi ya que como era menor de edad no me dejan salir”.

**QUINTO:** Que, por su parte, la demandada acompañó la siguiente prueba documental, en forma legal y no objetada:

A folio 28:

1.- Ord. DSGT N°4792- 15655, MAT “informa beneficios de reparación de personas que indica. Causas varias” de fecha 16 de agosto de 2023, del Instituto de Previsión Social (IPS).

**SEXTO:** Que, al no encontrarse controvertido por el demandado la calidad de víctima de prisión política y tortura del demandante ni la participación de los agentes del Estado en tales hechos se tiene como hecho de la causa que el actor fue víctima de prisión política y tortura por parte de agentes del Estado de Chile, figurando en el N°5737 de la nómina de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, siendo, en consecuencia, víctima de la violación de sus derechos humanos.

**SÉPTIMO:** Que, estando acreditadas las circunstancias señaladas en el considerando anterior, corresponde dilucidar y resolver las alegaciones sostenidas por el Consejo de Defensa del Estado en su contestación.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: RQKCXSXTLX

**OCTAVO:** Que la demandada opuso en primer término la excepción de reparación integral por haber sido ya indemnizado el actor.

**NOVENO:** Que al respecto cabe señalar que el Estado de Chile ha hecho un formal reconocimiento de una serie de hechos constitutivos de violación de los derechos humanos acaecidos durante el régimen militar, a través del mensaje que creó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación.

Que, al respecto, la ley 19.992 y sus modificaciones, correspondiente a las asignaciones entregadas en razón de los reconocimientos efectuados por la Comisión Valech a las víctimas directamente afectadas por violaciones a los derechos humanos individualizadas en el anexo “Listado de prisioneros políticos y torturados”, situación en la que se encuentra el demandante, y las reparaciones simbólicas a que alude el demandado, constituyen más bien un beneficio de carácter social tendiente a cumplir, además, con las obligaciones internacionales asumidas por el Estado, mas no una indemnización de daño material y/o moral sufridos por las víctimas de violación a los derechos humanos, pues no aparece en la determinación de su monto que se hayan considerado los elementos propios y personales de quienes han debido soportar los sufrimientos y consecuencias de los actos de los que se trata, lo cual lleva a desestimar las alegaciones deducida por la parte demandada.

**DÉCIMO:** Que, seguidamente, cabe hacerse cargo de la excepción de prescripción extintiva civil opuesta por el Fisco de Chile.

**DÉCIMO PRIMERO:** Que, en este sentido, la Asamblea General de Naciones Unidas, por Resolución N°2.391 (XXIII), de 26 de noviembre de 1968, en vigor desde el año 1970, aprobó la “Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y los Crímenes de Lesa Humanidad”, la que dispuso:

“Considerando que los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad figuren entre los delitos de derecho internacional más grave.

Convencidos de que la represión efectiva de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad es un elemento importante para prevenir esos crímenes y proteger los derechos humanos y libertades fundamentales, y puede fomentar la confianza, estimular la cooperación entre los pueblos y contribuir a la paz y seguridad internacionales.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: RQKCXSXTLX

Advirtiéndole que la aplicación a los crímenes de guerra y a los crímenes de lesa humanidad de las normas de derecho interno relativas a la prescripción de los delitos ordinarios suscita grave preocupación en la opinión pública mundial, pues impide el enjuiciamiento y castigo de las personas responsables de esos crímenes.

Reconociendo que es necesario y oportuno afirmar en derecho internacional, por medio de la presente Convención, el principio de la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad y asegurar su aplicación universal.

Conviene en lo siguiente: Artículo 1º: Son imprescriptibles:

a) Los crímenes de guerra, según la definición del Estatuto del Tribunal de Núremberg, los principios de derecho internacional de Núremberg confirmados por la Asamblea General de las Naciones Unidas y las Convenciones de Ginebra de 1949.

b) Los crímenes de lesa humanidad. Cometidos tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz según la definición del Estatuto del Tribunal de Núremberg, los principios de Derecho Internacional de Núremberg y confirmados por la Asamblea General de las Naciones Unidas, así como el apartheid y el genocidio.”

A continuación, el artículo 2º de este instrumento declara que la Convención se aplica, sin distinción, a las autoridades del estado y a particulares, ya sea que hayan participado como autores, cómplices o hayan incitado directamente a la perpetración de esos crímenes y cualquiera sea el grado de desarrollo.

**DÉCIMO SEGUNDO:** Que, con posterioridad, en el año 1973, la misma Asamblea General aprobó la Resolución N°3.074 (XXVIII), de fecha 3 de diciembre de 1973, “Principios de cooperación internacional para el descubrimiento, el arresto, la extradición y el castigo de los culpables de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad”, en la que señala lo siguiente:

“Los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad, dondequiera y cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido, serán



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: RQKCXSXTLX



objeto de una investigación y las personas contra las que existan pruebas de culpabilidad en la comisión de tales crímenes serán buscadas, detenidas, enjuiciadas y, en caso de ser declaradas culpables, castigadas.”

**DÉCIMO TERCERO:** Que, en este sentido, se debe tener presente que si bien la citada Convención no ha sido ratificada por el Estado de Chile, surge en la actualidad con categoría de norma de ius cogens, o principios generales del derecho penal internacional, cuya obligatoriedad en derecho interno se encuentra prescrita por la Constitución Política de la República (artículo 5, inciso segundo), de modo tal que el reconocimiento de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y de los crímenes de guerra, así como el aseguramiento objetivo y expreso de los derechos humanos, resulta indiscutible e imperativo para los tribunales nacionales.

A mayor abundamiento, siendo nuestro país un Estado Parte de la Organización de las Naciones Unidas, se encuentra obligado a cumplir de buena fe las resoluciones de la Asamblea General.

**DÉCIMO CUARTO:** Que, además, tanto la Declaración Universal de derechos humanos –artículos 4 y 5– como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas –artículos 7 al 10–, ratificados por Chile e incorporados a su derecho interno, prohíben en la práctica los crímenes contra la humanidad.

**DÉCIMO QUINTO:** Que, en relación con la supremacía de los tratados internacionales sobre el derecho interno, es preciso hacer constar que la modificación al antes citado artículo 5° de la Constitución Política de la República tuvo por objeto precisamente reforzar la protección de los derechos humanos, al disponer como deber de los órganos del Estado, respetar y promover tales derechos.

**DÉCIMO SEXTO:** Que cabe reiterar que la presente acción es de carácter reparatoria por derivar de la violación a los derechos humanos en crímenes de lesa humanidad, la que se rige por preceptos del derecho internacional que consagran la imprescriptibilidad, la que debe regir tanto en el ámbito penal como en el civil.

De seguir la tesis de la demandada, esto es, aplicar a este caso la prescripción del derecho privado, implicaría permitir que el Estado evitara



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: RQKCXSXTLX

cumplir su deber y se negaran derechos fundamentales, como el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas, por quien, como se señaló precedentemente, es el constitucionalmente obligado a resguardarlos, lo que lleva a rechazar la excepción de prescripción.

**DÉCIMO SÉPTIMO:** Que, establecido lo anterior y rechazada la excepción de prescripción, habrá de emitirse pronunciamiento respecto de los perjuicios demandados, los cuales hace consistir en daño moral, el que se avalúa en la suma total de \$150.000.000.-.

**DÉCIMO OCTAVO:** Que, en cuanto al daño moral demandado, ha de señalarse que, a pesar de su naturaleza particular, debe ser probado por quien lo reclama, toda vez que éste constituye un presupuesto para el origen de la responsabilidad civil, y, por tanto, aquel que intente beneficiarse de la concurrencia de la misma, tendrá la carga probatoria de demostrar su existencia.

Así, la indemnización del daño moral requiere que el mismo sea cierto, vale decir, que sea real y no hipotético, el que deberá ser demostrado por los medios de prueba legalmente establecidos por nuestro ordenamiento jurídico.

Por otra parte, el daño moral consiste, equivale y tiene su fundamento en el sufrimiento, dolor o molestia que el hecho ilícito ocasiona en la sensibilidad física o en los sentimientos o afectos de una persona. Se toma el término dolor en un sentido amplio, comprensivo del miedo, la emoción, la vergüenza, la pena física o moral ocasionado por el hecho dañoso.

También puede ser entendido, como algunos autores lo sostienen, como un menoscabo de un bien no patrimonial, en cuanto dolor, pesar, angustia y molestias psíquicas que sufre una persona en sus sentimientos, consecuencias del hecho ilícito; un hecho externo que afecta la integridad física o moral del individuo.

**DÉCIMO NOVENO:** Que, en orden a acreditar la existencia y evaluación del daño moral, el demandante rindió prueba testimonial, valorada conforme a la regla del N° 2 del artículo 384 del Código de Procedimiento Civil, cuyas declaraciones permiten establecer el daño moral sufrido por el actor y además, se acompañó a folio 1 informe por daño asociado a violencia política, suscrito por profesionales del programa PRAIS del Servicio de Salud



Araucanía Norte, el que concluye que el demandante sufrió secuelas en su desarrollo socioeconómico y en su ámbito laboral, además de consecuencias en su ámbito psicológico, con un relato concordante con la observación clínica del evaluador. Se le diagnostica con “trastorno de estrés postraumático”, con la siguiente sintomatología “exposición a amenazas de lesiones, síntomas de intrusión, evitación de estímulos asociados al suceso traumático, alteraciones cognitivas y del estado del ánimo (...) y alteración de la alerta y la reactividad”.

Además, acompañó un certificado médico de fecha 05 de diciembre de 2022, emitido por la Medica-Cirujana general Dra. Sofía Cortés Orrego del Centro de Salud Familiar Victoria, no se aprecia que el diagnóstico efectuado esté vinculado a los hechos relatados por el actor, por lo que se le restará valor probatorio.

Que atendido que el demandante figura en la nómina de personas reconocidas como víctima de prisión política y tortura, y teniendo en especial consideración la gravedad del hecho ilícito del que fue víctima, sin que se rindiera otra prueba en orden a determinar con mayor precisión la evaluación del daño moral alegado, será regulado prudencialmente en la suma de \$50.000.000.-

Que en cuanto a la alegación de la parte demandada, en orden a estimar que para la regulación del daño moral se consideren los pagos recibidos por las leyes de reparación, será desestimado, por cuanto corresponden a asignaciones entregadas en razón de los reconocimientos efectuados por la Comisión Valech a las víctimas directamente afectadas por violaciones a los derechos humanos, más no una indemnización de daño moral sufrido por las mismas, pues no aparece que en la determinación de su monto se hayan considerado los elementos propios y personales de quienes han debido soportar los sufrimientos y consecuencias de los actos de los que se trata.

**VIGÉSIMO:** Que, en lo referente a la reajustabilidad de la indemnización por daño moral, ésta se reajustará de conformidad a la variación que experimente el I.P.C desde el día en que la presente sentencia quede ejecutoriada y hasta el momento del pago efectivo, por cuanto el daño moral es evaluado por el juez en la sentencia, de ahí que las perniciosas



consecuencias de la desvalorización monetarias sólo pueden empezar a producirse desde la fecha de la sentencia que regula el daño en comento.

**VIGÉSIMO PRIMERO:** Que, respecto de los intereses, las sumas contempladas en lo resolutivo del fallo devengarán el interés corriente desde la fecha en que la sentencia quede firme o ejecutoriada y hasta la época de su pago efectivo.

Y atendido lo antes razonado y lo dispuesto en los artículos 47 y siguientes 1437, 1698 y 1702 del Código Civil, artículos 144, 160, 170, 341, 342, 346 y 384 del Código de Procedimiento Civil, Constitución Política de la República, Convención Americana de Derechos Humanos, Convenio de Ginebra de 1949 y Ley 19.992, se declara:

I.- Que se acoge parcialmente la demanda interpuesta a folio 1, y se condena al Fisco de Chile a pagar al demandante, a título de daño moral, la suma de \$50.000.000, más los reajustes e intereses reseñados en los motivos 20° y 21° del presente fallo.

II.- Que cada parte soportará sus costas, por no haber resultado totalmente vencido el demandado.

Regístrese y notifíquese.

Pronunciada por María Soledad Jorquera Binner, Juez Titular.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, tres de febrero de dos mil veinticinco.**



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: RQKCXSXTLX